

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 9, capítulo CXXXIV

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Carlos Sánchez Silva

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 9, capítulo CXXXIV

**Anotado y revisado por
Carlos Sánchez Silva
(UABJO)**

**con la colaboración de
Maira Cristina Córdova Aguilar**

Capítulo CXXXIV

**González Ortega plantea sutil problema
constitucional**

Noviembre de 1864

CAPÍTULO CXXXIV

GONZÁLEZ ORTEGA PLANTEA SUTIL PROBLEMA CONSTITUCIONAL

Noviembre de 1864

Una vez que le fue retirado el mando del primer cuerpo de ejército de occidente, al general González Ortega, perdimos su pista; pero su nieto el señor licenciado José González Ortega nos informa que siguió en su peregrinar al gobierno y se radicó en la ciudad de Chihuahua.

Seguramente quedó disgustado por la decisión tomada en su contra, pues permaneció al margen de todas las actividades políticas y sociales derivadas de la llegada del gobierno a esa ciudad. De la lectura de los periódicos locales, del *Diario Oficial* y de los relatos sobre lo ocurrido en esos días, por diversos autores contemporáneos a los acontecimientos, no se sabe de sus actividades. Es evidente que permaneció apartado del mundo gubernamental, sin tener participación alguna en las decisiones que se tomaban.

Ya hemos visto que el propio Maximiliano consideraba que el período presidencial de Juárez terminaba el 30 de noviembre de 1864. Este parecer había sido ya planteado por la prensa, tanto de la ciudad de México como de provincia.

El Gral. González Ortega, precisamente el 30 de noviembre, en papel que llevaba como membrete "Presidente constitucional de la Suprema Corte de Justicia", presentó a don Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y de gobernación, un documento llevando como epígrafe los artículos 75, 78, 79, 80 y 82 de la Constitución política vigente. Entrando en materia, sostenía en él la opinión de que el período presidencial de Juárez concluía en

ese día y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de tomar el mando en sustitución de Juárez.

No obstante que la comunicación tiene un tono de seguridad, concluye en forma de pregunta, manifestando que aceptará la decisión que el presidente Juárez adopte.

Lerdo de Tejada contesta ese mismo día en un largo alegato, concluyendo que no es correcta la interpretación del Gral. González Ortega y que el período presidencial de Juárez concluye hasta el 30 de noviembre de 1865.

Es indudable que esta cuestión había sido ya estudiada por el gabinete, pues no es posible que en unas cuantas horas se pudiera preparar una respuesta tan erudita y cuidadosamente redactada.

Ambos documentos se incluyen en este capítulo, por lo que preferimos no entrar a mayores consideraciones, esperando que el lector los examine.

Don José María Iglesias, que es la persona que escribió más sobre los sucesos de estos días, señala que el ministerio de Relaciones y Gobernación no sólo se ocupó de contestar la interpelación del Gral. González Ortega, sino que además examinó por una parte el problema que tarde que temprano tenía que presentarse, cuando se llegara el 30 de noviembre de 1865 y que, por efecto de la guerra extranjera, no se hubieran podido hacer elecciones para designar al sustituto del presidente Juárez.

También se ocupó de opinar sobre si el Gral. González Ortega conservaba el carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ambas cuestiones quedaban contestadas también en la respuesta que Sebastián Lerdo de Tejada entregó el 30 de noviembre, al Gral. González Ortega.

Este incidente ha sido ignorado por la mayor parte de los historiadores que han examinado esta época, Justo Sierra no lo menciona y Roeder no le da mucha importancia.

Por ello pensamos que era útil y necesario escuchar la opinión de un docto en cuestiones constitucionales, razón por la que recurrimos al doctor Antonio Martínez Báez, con la súplica de que se

sirviera darnos a conocer su opinión sobre este incidente. El lector podrá ver que, en opinión del Dr. Martínez Báez, la decisión tomada por el presidente Juárez y su gabinete fue correcta.

El Gral. González Ortega aceptó el punto de vista del gobierno y durante todo diciembre continuó viviendo discretamente en Chihuahua sin ningún contacto con él.

El 28 de diciembre dirige una carta personal a Juárez, pidiéndole ordene que se le extienda un pasaporte con el objeto de pasar a los Estados Unidos y de allí continuar a alguna zona del país, donde pudiera continuar luchando contra el invasor. Señala también que acompaña la solicitud de licencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia.

No hemos podido encontrar la respuesta de Juárez, tanto en su archivo, como en la obra publicada por el nieto del Gral. González Ortega. En el reverso de la carta de González Ortega aparece una nota hológrafa de Juárez indicando que fue contestada al día siguiente. El licenciado José González Ortega, en la obra en que trata de justificar a su abuelo, reproduce de la respuesta de Juárez únicamente el párrafo que transcribimos a continuación y que se encuentra en la página 224 de esa obra:

Ya queda acordado que se le conceda a usted la licencia y pasaporte que solicita y oportunamente le entregarán a usted, los respectivos ministerios, los documentos indicados.

Termina este capítulo con un documento firmado por el ministro de Guerra, Gral. Miguel Negrete, concediéndole licencia en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia.

DOCUMENTOS

Noviembre de 1864

GONZÁLEZ ORTEGA CONSIDERA QUE DEBE SUSTITUIR A
JUÁREZ. PORQUE HA CONCLUIDO SU MANDATO

Al ciudadano ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación
Presente

Artículo 75. — Se depositará el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un solo individuo que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".

Artículo 78. — El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y durará en su encargo cuatro años.

Artículo 79. — En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 80.- Si la falta del presidente fuera absoluta, se procederá a nueva elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 y el nuevamente electo, ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Artículo 82. — Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviera hecha y publicada para el 1º de diciembre, en que debe verificarse el reemplazo, o el electo no estuviera pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará, sin embargo, el antiguo y el supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Ciudadano ministro:

Por lo prevenido en el artículo 80 de nuestra Constitución política, el Presidente de la República que ha sido electo para sustituir, por falta absoluta a su antecesor, debe ejercer sus "funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección" y no durar cuatro años completos como el que ha comenzado a ejercerlas el día 1º de diciembre, según se infiere claramente del artículo 78 de la misma Constitución que dice: "El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y durará en su encargo cuatro años".

En el primer caso se encuentra, en mi concepto, el actual magistrado supremo de la nación, ciudadano Benito Juárez, quien fue electo para sustituir, por falta absoluta, a su antecesor y como su elección se verificara a principios y se publicara a la mitad del año de 1861, el cuarto año siguiente al de aquélla, entiendo que es precisamente el corriente de 1864. Razón que se pone más de manifiesto si se atiende a la distinción que se hace en los artículos citados, por medio de los que quiso nuestro pacto político y lo dejó consignado en preceptos bien claros, que el presidente que entrara a ejercer sus funciones el 1º de diciembre, durara cuatro años y, que el que comenzara a ejercerlas por elección y falta absoluta de su antecesor, durará hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Electo yo presidente de la Suprema Corte de Justicia por el voto de los pueblos, única fuente de autoridad entre nosotros, sería el que remplazara al actual supremo magistrado en el ejercicio de sus espinosas y difíciles tareas, caso de separarse del mando y para llenar en esta parte el deber que me impone el honor, la consigna de la ley y el voto nacional, sólo esperaría el 1º del próximo mes de diciembre, si otras razones no me obligaran a dirigir a usted esta nota, la víspera de aquel día.

Según los informes que tengo, el ciudadano presidente Benito Juárez ha manifestado verbalmente a personas caracterizadas, que el ejercicio de sus funciones legales no cesa sino hasta dentro de un año,

esto es, el día último de noviembre de 1865. He aquí distintos pareceres, sin que pueda comprender en qué se funda este último, respecto de la inteligencia que debe darse a esta parte de nuestro estatuto político.

Ni por un momento he creído, que el hombre que tan honrosamente ha conservado el depósito de la ley que le encomendara el pueblo, fuera el que conculcara ese depósito, esa misma Constitución a la que debe su existencia política, confundiéndose con esos hombres que deja tras de sí, quienes han abierto una ancha vía a la inmoralidad, supuesto que para ellos la ley no ha sido otra cosa que un despreciable pedazo de papel que han roto y pisoteado según cuadraba a sus miras, poniendo siempre por pretexto la salvación del Estado; pero esa creencia de mi parte, fundada en los antecedentes públicos del hombre que actualmente rige los destinos del país, ni aclara la ley si es que puede haber duda en ello, en un punto de tan vital importancia, ni puede servir de dique a la anarquía que fácilmente aparecerá entre nosotros, supuesto que no pocas personas de representación política, en la República, dan a la ley la misma inteligencia que yo.

Por otra parte, tengo que cumplir, lo mismo que el ciudadano presidente Benito Juárez, solemnes compromisos de honor para con la nación, consignados en la ley. Llenar, pues, mi deber, salvar la responsabilidad que me imponen esos mismos compromisos ante mi conciencia, ante los pueblos y ante la historia, evitar males que pueden sobrevenir con deshonra de mi patria, atendidas las circunstancias actuales y afianzar el poder, si esto es posible, en las manos del que deba ejercerlo, es el objeto de esta nota.

Espero, por lo mismo, señor ministro, que usted se dignará dar cuenta con ella al ciudadano presidente, para que se sirva decirme oficialmente si, en cumplimiento de los preceptos constitucionales que he citado, me entrega el mando supremo el día de mañana, o en caso contrario, como me supongo que acontecerá, que se acuerde al menos fijar la inteligencia que quiera darse a esos mismos preceptos constitucionales.

Quizá esta resolución no sólo sirva para evitar la anarquía, sino para robustecer el legal ejercicio de las subsecuentes funciones del

ciudadano presidente y, lo que es más, para dejar incólume la ley, esa ley que ha sostenido con su sangre el pueblo mexicano, durante el largo período de ocho años.

Por lo que a mí toca, celoso como el que más del buen nombre de mi patria, protesto ser el primero en acatar esa resolución, no como un acto de desprendimiento, que no puedo ni debo hacer en lo que no me pertenece y que tendría el carácter de criminal y punible en las circunstancias actuales, sino como el único medio que me marcara en este caso la necesidad, para ponerme a cubierto de toda responsabilidad ante los pueblos y evitar la anarquía entre nosotros, porque deseo, como todo el que ama a su patria, que México se salve decorosamente y que si esto no es posible y tiene que sucumbir en la lucha que sostiene contra la Francia y contra algunos malos mexicanos, lo haga hundiéndose honrosamente con su bandera, sin dejar tras de sí el amargo recuerdo de que la desgracia y los reveses de la fortuna, fueron capaces de introducir la división entre los defensores de sus derechos.

Independencia, Libertad y Reforma, Chihuahua, noviembre 30 de 1864.

Jesús González Ortega
Presidente constitucional de la
Suprema Corte de Justicia

RAZONADA RESPUESTA DEL MINISTRO LERDO DE TEJADA
SOBRE EL PROBLEMA PLANTEADO POR GONZÁLEZ ORTEGA

Ciudadano Gral. Jesús González Ortega,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Presente

Impuesto el ciudadano Presidente de la República de la comunicación que se ha servido usted dirigirme hoy, respecto de si ha llegado el caso de que debiera usted sustituirlo en el ejercicio de su autoridad, ha acordado en junta de ministros, que dirija a usted esta contestación.

Como lo expresa usted es exacto que, con motivo de lo que algunas personas expusieron en lo privado al gobierno, éste manifestó, desde hace tiempo, también en lo privado, su juicio de que los cuatro años del período para que fue electo el actual ciudadano presidente, no deben terminar hoy sino el día 30 de noviembre del año próximo. Por las prescripciones de varios artículos de la Constitución de la república y, especialmente por el tenor literal del artículo 80, se pudo fácilmente formar aquel juicio con seguros fundamentos.

Dispone el artículo 78 que: "El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y durará en su encargo cuatro años". Redactado en términos generales este artículo, sin que en el mismo ni en el siguiente que trata de la elección del nuevo presidente, por falta absoluta del anterior durante su período, se haga ninguna distinción entre este caso y el de la elección hecha en el tiempo ordinario, para remplazar al que termina su período, es claro que en ninguno de los dos casos, quiso la Constitución que las funciones del presidente durasen menos de cuatro años.

Previene el artículo 80 que el presidente nuevamente electo, por falta absoluta del anterior, "ejercerá sus funciones hasta el día último

de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección". Conforme a este precepto, siempre que el nuevamente electo tomara posesión en otra fecha que no fuera el 1º de diciembre, como la tomó el actual ciudadano presidente en 15 de junio de 1861, resultaría que, debiendo precisamente terminar en 30 de noviembre, si este día es el del cuarto año siguiente al de su elección, durará, con arreglo al artículo 80, un poco más de cuatro años y, si ese día fuera el del tercer año que sigue al del de la elección, según ha contado usted el término en el presente caso, entonces, contra la regla general del artículo 78, duraría menos de cuatro años. Es de notarse que, según la opinión que ha referido usted de algunas personas que quisieran contar los cuatro años siguientes al de la elección, incluyendo hasta el de ésta entre los cuatro, como si pudiera decirse que un año fuera siguiente a él mismo, sucedería que, si el presidente nuevamente electo tomaba posesión a mediados o fines de diciembre, se infringiría más la regla general del artículo 78, no durando el presidente ni tres años.

Para la equivocación en que hayan podido incurrir aquellas personas, por una lectura ligera de los artículos constitucionales, acaso haya dado motivo el deseo de evitar que las funciones del presidente durasen, en algún caso, un poco más de cuatro años. Pudieron inclinarse a esto, creyendo que el espíritu de la Constitución hubiera sido muy estricto para seguir el principio de no prolongar en nada la duración de los funcionarios públicos, ni permitir que la del presidente excediera, en ningún caso, del período ordinario. Sin embargo, hubieran podido observar también que, entre este inconveniente y el de reproducir con frecuencia innecesaria las agitaciones de una elección, pudo nuestro código fundamental no creer peligroso que alguna vez durasen las funciones de un presidente algunos meses o algunos días más de cuatro años.

Por la prensa y en lo privado, han sostenido algunos que, para conciliar todos los artículos de la Constitución, debe considerarse que el 78 establece de un modo absoluto para todos los casos, que el presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre. Según esa opinión, el artículo 79 que trata del presidente electo por falta absoluta del anterior

y no contiene expresa excepción de la regla general del artículo 78, debe entenderse en el sentido de que el electo espere siempre a tomar posesión el día 1º de diciembre, ejerciendo el poder, entretanto, el presidente de la Corte. Si esta opinión fuese la más fundada, siempre se contarían con exactitud los períodos de cuatro años, no siendo ya posible que en algún caso durasen las funciones del presidente más o menos tiempo.

Conforme a la misma opinión, habría sido un error que el Congreso diera posesión al actual ciudadano presidente en 15 de junio de 1861, debiendo haber esperado a darla el 1º de diciembre. Por lo demás, esto habría sido tan sólo un error de hecho, que no habría podido alterar el verdadero derecho constitucional y, si hubo tal error, no quedaría el inconveniente de hacer dudosa la legalidad de los actos del ciudadano presidente en aquellos meses, ni podría imputársele que entonces ejerciera indebidamente el poder, puesto que de todos modos lo hubiera ejercido, ya como presidente constitucional o ya como presidente que era antes de la Corte de Justicia.

Fuera de todo lo expuesto, para esclarecer con evidencia la resolución del presente caso, bastaría la letra expresa del citado artículo 80, en el cual se previene que el presidente electo, por falta absoluta del anterior, "ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección". Sería inútil explicar esta regla, después de haber hecho notar el sentido literal de sus palabras. En efecto, el cuarto año siguiente al de la elección, supone los años primero, segundo y tercero siguientes al de ella, y hacer una cuenta de que el primer año siguiente fuese el de la misma elección, equivaldría a pretender, como ya se ha dicho, que un año fuera siguiente a él mismo.

De ahí es que, verificada la elección del actual ciudadano presidente en el año 1861, el primer año siguiente al de la elección fue el de 1862 y, por lo mismo, el corriente año de 1864 no es el cuarto, sino el tercero siguiente al de su elección. En tal virtud, la fecha del término del período del ciudadano Presidente de la República, no es sino el 30 de noviembre de 1865, conforme al evidente tenor literal del artículo 80 de la Constitución.

Atendidas sus claras prescripciones, no parece posible sostener ninguna duda en este punto. Además, en el caso de haber personas que creyesen todavía dudosa la inteligencia de los artículos constitucionales como quiera que sólo al Poder Legislativo correspondería interpretarlos, fijando su verdadero sentido, deberían ya considerar que quedaba resuelto el punto en los términos expresados, pues ahora la facultad de resolverlo sólo correspondería al ciudadano Presidente de la República, que ejerce el Poder Legislativo, con toda la amplitud de facultades que por repetidos votos de confianza le delegó la representación nacional.

Fundado y resuelto que el período del ciudadano presidente no termina en este año, podría limitarse a esto la contestación que se diera a usted si su comunicación no hiciera oportuno consignar aquí, brevemente, lo sustancial de otras observaciones, que muchas personas revestidas de carácter público han expuesto también al gobierno.

Se han referido algunas de esas observaciones a que deberán considerarse prorrogados los poderes y la autoridad del actual ciudadano presidente, por todo el término necesario fuera de su período constitucional, si en el tiempo en que debiera elegirse nuevo presidente, la situación extraordinaria causada por la guerra extranjera, hacía imposible que se verificase constitucionalmente la elección. Han alegado que, a su juicio, debieran considerarse prorrogadas del mismo modo los poderes de todas las autoridades constitucionales que desempeñan funciones indispensables para la conservación del poder público, mientras el estado de la guerra impidiese su renovación constitucional que así, como por un efecto inevitable de la guerra, se interrumpe y suspende el régimen de la Constitución, debieran considerarse, conforme a su artículo 128, suspensas las reglas y limitaciones que ella establece respecto de los actos electorales y, los períodos de las autoridades, hasta que el pueblo recobrase su libertad para poder remplazarlos con sus votos y restablecer en todo su vigor el régimen constitucional y que el espíritu de la prevención del artículo 82 para que cese el Presidente de la República al término de los cuatro años, sustituyéndolo el presidente de la Corte, fue sólo evitar que el presidente abusara de su influencia y

de su poder estorbando la elección, por lo cual consideraban que esta regla trata del hecho de que no se haya verificado la elección, pudiendo verificarse y no del caso en que haya habido un impedimento real y absoluto, sin voluntad ni culpa presumible del presidente y sólo a causa de la notoria imposibilidad producida por la guerra.

Sostenían que si la ley suprema de la necesidad, que no permitiría dejase de haber un encargado del gobierno, haría incuestionable que se prorrogaran los poderes del Presidente de la República, en el caso de haber faltado antes el presidente de la Corte e igualmente haría incuestionable que, en el caso de falta del Presidente de la República, se prorrogaran los poderes del presidente de la Corte, aun fuera de su período de seis años, esa misma ley de la necesidad, fundaría que debieran considerarse prorrogados, a la vez, los poderes de ambos magistrados, para que en todo evento de desgracia, la falta del uno pudiera ser sustituida por el otro. Agregaban que, por estas razones, no debería cesar el Presidente de la República sino cuando el pueblo pudiera elegir de nuevo a la persona que mereciera su confianza y que, entretanto, debería atenderse a que el pueblo dejó encargados sus destinos y otorgó su primera y preferente confianza al que eligió para primer magistrado de la república, no otorgándola sino en su falta, al designado para que pudiera sustituirlo, en los casos probables, dentro del régimen constitucional.

Nada más he indicado estas observaciones, porque la comunicación de usted ha dado motivo para consignar lo que en este asunto se ha expuesto al gobierno. Él no ha querido antes, ni quiere ahora, fundar ningún juicio sobre este punto, supuesto que aún no ha llegado el tiempo en que debieran verificarse las elecciones, ni ha llegado el caso de ver si entonces el estado de la guerra impidiera verificarlas, ni se debe por esto anticipar la previsión de todas las circunstancias que hayan podido ocurrir, cuando ya sea necesario proceder en ese punto del modo que

fuere más arreglado a la letra y al espíritu de nuestras instituciones.

Pero si ha sido necesario, para poder contestar a usted su comunicación con el carácter que la ha dirigido, considerar y resolver otras observaciones, relativas a si no conservaba usted el carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Estas otras observaciones se han fundado en lo prevenido por el artículo 118 de la Constitución que prohíbe tener a la vez dos cargos de elección popular, permitiendo al nombrado elegir entre ambos el que quiera desempeñar. Nombrado usted presidente de la Corte y gobernador constitucional del estado de Zacatecas, cuando se presentó usted en la ciudad de San Luis Potosí a la Corte, marchó muy pocos días después a Zacatecas donde entró usted, desde luego, a desempeñar el gobierno de aquel estado. Por este motivo, entre los funcionarios públicos que había en San Luis (Potosí), así como también en otras partes, se formó la opinión de que usted sabrá usar de la libertad que le dejaba la Constitución, prefiriendo desempeñar el cargo de gobernador de Zacatecas y dejando de tener, por ese hecho, el carácter de presidente de la Corte.

Aunque la letra del artículo constitucional habla de dos cargos de la unión, se creyó que era igualmente aplicable al caso de que una persona hubiese sido elegida para un cargo de la unión y para un cargo de algún Estado. Se apoyaba esta creencia, en que la citada regla del artículo 118 es la única que tiene la Constitución en esta materia, de dos cargos incompatibles, considerando por esto que era la única regla que podía aplicarse en el caso de dos cargos, como el presidente de la Corte y gobernador de Zacatecas, entre los que por la misma naturaleza de las cosas había tan clara incompatibilidad, ya por haberla entre las funciones del Poder Judicial y los poderes administrativos y ya por tratarse de dos cargos cuyas funciones no podían desempeñarse sino en diversos lugares. Se consideraba que era tanto más aplicable el caso, cuanto porque hubo en la época de otras constituciones anteriores, la regla de que en casos análogos debería

preferirse el cargo de la unión al cargo de un estado y esa regla no se puso en nuestra Constitución actual.

Para corroborar la referida opinión, se creía qué fuese la misma formada por usted a fin de apoyar en ella su conducta. No obstante saberse que, conforme al reglamento económico de la Corte, dado por el gobierno, cuando marchó usted de San Luis (Potosí) manifestó oficialmente a la Corte que tomaba la licencia que podía usar durante un mes y que algún tiempo después de transcurrido el mes, pidió usted a la Corte que le concediera, como le concedió, la licencia que podía darle para más de un mes, se consideraba que ambas licencias sólo hubieran podido justificarse por motivos particulares que obligasen a usted a dejar de concurrir al tribunal y nada más hubieran servido para este único efecto, sin que usted pudiera autorizarse por sí mismo para ir a un lugar diverso, llevando el objeto de desempeñar otro cargo incompatible con el desempeño de sus deberes en la magistratura y sin que la Corte hubiera expresado en su licencia que lo facultaba para esto, ni hubiera podido tampoco facultarlo como materia para lo que sería del todo incompetente la autoridad del tribunal. Por estas consideraciones, se pensaba que usted había obrado en la misma creencia, de usar de su libertad para elegir el desempeño del cargo de gobernador y dejar el carácter de presidente de la Corte, no debiendo presumirse, que si tenía usted otro concepto, hubiera querido desatender los deberes impuestos por la Constitución abandonando voluntaria e indefinidamente el desempeño de la magistratura.

Luego que el supremo gobierno tuvo noticia de que había usted entrado a desempeñar el gobierno de Zacatecas, le manifestó los graves inconvenientes de que por esto se considerara que dejaba usted de tener el carácter de presidente de la Corte, cuando las circunstancias de la guerra dificultarían una nueva elección para que, en caso de faltar el Presidente de la República, hubiera quien pudiese sustituirlo. Con el deseo de evitar estos inconvenientes, se expusieron a usted oficialmente y también se le dirigieron cartas confidenciales en las que, después de diversas contestaciones, queriendo que no perdiese usted el carácter de presidente de la Corte, se llegó a decirle que estaba

dispuesto el supremo gobierno a emplear el único medio que ocurría para allanar la dificultad. Este medio era que pidiese usted una licencia al supremo gobierno quien estaba dispuesto a concedérsela, en uso de las amplias facultades delegadas por el Congreso nacional, única autoridad que hubiera podido conceder licencia al presidente de la Corte, para desempeñar por algún tiempo el gobierno de un estado, separándose de la magistratura. Sin embargo, no se resolvió usted a pedir la licencia al gobierno, ni tampoco se llegó a recibir alguna contestación de usted a lo que oficialmente se le dijo sobre este asunto.

Habiendo sido desde entonces muy conocidas en el público todas estas circunstancias, muchos creyeron que había usted dejado de tener el carácter de presidente de la Corte, otros, por lo menos, dudaron de que lo conservase usted y, en esta materia, la sola duda pudiera producir graves males, llegando el caso de que se encargara usted de la Presidencia de la República. La causa de ella, sobre todo en la difícil situación actual, se interesa en que tenga un título, cierto y reconocido, la persona que, en caso de falta del presidente deba sustituirlo y, por esto, en lugar de limitarse ahora a manifestar que aún no ha llegado ese caso, ha querido el gobierno resolver este otro punto sin tener más móvil que el del interés nacional. Con este fin, el ciudadano presidente ha acordado usar sus amplias facultades, para resolver que tiene usted el carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia y que, con ese carácter, llegando el caso de faltar el ciudadano Presidente de la República, podrá usted entonces sustituirlo.

En cuanto al primer objeto de esta comunicación, la evidencia de las disposiciones constitucionales, que realmente no deja posibilidad de fundar duda ninguna sobre que el período del ciudadano presidente no debía terminar en este año, satisfará la confianza que se ha servido usted manifestar de que el ciudadano presidente respetaría, en esta vez como ha respetado siempre, la ley. Esta misma evidencia demuestra la razón de los otros conceptos de usted en que quiso hacer estricta justicia a la rectitud del ciudadano presidente que, por lo demás, hace largo tiempo es notoria y generalmente reconocida.

Ahora, como siempre, su único objeto es llenar las obligaciones que le impuso la elección del pueblo. Después de haber ejercido el poder algunos años, en estas circunstancias no pudiera ofrecerle ningún halago el gobierno; pero, en las desgracias de la república, no podría el ciudadano presidente querer eximirse de ninguno de sus deberes que procurará cumplir hasta el fin, según su conciencia y conforme a los votos del pueblo mexicano.

Independencia, Libertad y Reforma, Chihuahua, noviembre 30 de 1864.

(Sebastián) Lerdo de Tejada
Ministro de Relaciones Exteriores
y de Gobernación

GONZÁLEZ ORTEGA RESUELVE SALIR DEL PAÍS

Chihuahua, diciembre 28 de 1864

Sr. presidente licenciado don Benito Juárez
Presente

Muy señor mío y amigo:

Habiendo terminado el negocio que me trajo a esta ciudad, hace un mes que me encuentro en ella sin objeto alguno; objeto que tampoco he tenido en este estado desde principios de octubre último en que se me ordenó, por disposición de usted, que entregara el mando de las fuerzas que quedaban del ejército de occidente al Sr. Gral. Patoni.

Espero, por lo mismo, que tendrá usted la bondad de mandarme extender un pasaporte, como soldado, para poderme retirar y ver en qué puedo servirle en otro punto a mi patria.

También creo conveniente, atendidas las circunstancias actuales y puntos que ocupa el enemigo, que en el pasaporte tuviera usted la dignación de ordenar que se dijera que para continuar prestando mis servicios en la lucha que México sostiene contra la Francia, puedo dirigirme al interior de la república o a cualquiera punto de ella situado en sus costas, por las vías que yo estime por conveniente, aun atravesando algún país o territorio extranjero.

No creo hacer uso de esto último, porque para introducirme al interior por una vía recta, aunque con pequeños rodeos, sólo espero las noticias que deberá traerme un mozo que está al llegar a esta ciudad; pero siempre deseo estar prevenido para toda clase de circunstancias y eventualidades; porque no quiero como un imbécil caer en manos del enemigo, una vez que él ocupe todo el interior. En esta parte creo que

usted comprenderá mis palabras y será deferente a ellas. Además de las razones que motivan mi marcha y que he referido, hay otras de mucho peso y que no le manifiesto porque no lo creo del caso; esto no obstante, no juzgo por demás decirle que en el estado a que han llegado las cosas, no creo lejana una crisis y que sería un mal para la república que ambos cayéramos en una celada que no es remoto que a esta hora estén proyectando desde el interior de la república los enemigos de ella.

Remito a usted también la licencia que solicito como presidente de la Corte de Justicia.

Creo que en mi carta no verá usted otra cosa que una manifestación de mi respeto a la autoridad suprema de mi país.

Suplicándole a usted la pronta remisión del pasaporte y licencia, me repito su amigo que le desea acierto y felicidad.

Jesús González Ortega

SE CONCEDE LICENCIA A GONZÁLEZ ORTEGA
COMO PRESIDENTE DE LA CORTE Y PERMISO DE IR
A PUNTOS NO OCUPADOS POR EL INVASOR

Ciudadano general de división,
Jesús González Ortega
Presente

Con esta fecha me dice el ciudadano ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, lo que sigue:

Con esta fecha digo al ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que sigue:

En vista de la solicitud de usted relativa a que se le conceda licencia como presidente de la Suprema Corte de Justicia, para pasar a puntos no ocupados por el enemigo, a fin de continuar defendiendo con las armas la independencia de México, el ciudadano presidente se ha servido acordar, en junta de ministros, que se concede a usted licencia por tiempo indefinido, hasta que vuelva a presentarse en la residencia del gobierno o hasta que el mismo gobierno llame a usted o le dé alguna comisión, pudiendo entretanto dirigirse, bien sea directamente o bien atravesando de tránsito el mar o algún territorio extranjero, a puntos de la República Mexicana no ocupados por el enemigo para continuar defendiendo la independencia nacional con las fuerzas que pueda usted levantar; bajo el concepto de que en las operaciones militares que emprenda, obrará usted de acuerdo con el gobernador y comandante militar del estado respectivo, o con los demás jefes

de las fuerzas republicanas; para que en combinación con las levantadas por usted hostilicen a las contrarias, dejando expedita la acción de las autoridades que ejerzan mando político o militar, con nombramiento del gobierno supremo o de sus delegados competentemente facultados para expedirlo.

Dígoles a usted de orden superior, en contestación a su oficio relativo de 28 del que acaba.

Y tengo el honor de comunicarlo a usted para los fines correspondientes.

Y lo traslado a usted por lo relativo al ramo de la guerra.

Independencia y Libertad, diciembre 30 de 1864.

Miguel Negrete

OPINIÓN DEL DR. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ
SOBRE EL TEXTO PRIMITIVO DEL ARTÍCULO 80
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857
Y SUS POSTERIORES REFORMAS

La Constitución política federal jurada en 5 de febrero de 1857, dispuso en su artículo 78: "El presidente entrará a ejercer sus funciones el 1º de diciembre y durará en su cargo cuatro años" y en el artículo 79 previno: "En las faltas temporales del presidente de la república y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia".

Además, el artículo 80 establecía hasta la reforma del año 1882: "Si la falta del presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección..., y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección".

De conformidad con estos preceptos constitucionales, si bien el período presidencial era de cuatro años, como regla general, en casos normales; cuando faltase de manera definitiva el jefe del Poder Ejecutivo, éste era sustituido en forma transitoria por el presidente de la Suprema Corte y la falta absoluta del jefe del Estado daba lugar a celebrar una nueva elección presidencial en los términos del artículo 76 de la propia Constitución, sin que, entonces, el presidente de la Corte tuviera que concluir el periodo de cuatro años interrumpido por la falta absoluta del Presidente de la República. En cambio, según la terminante, clara e inequívoca disposición del artículo 80, el presidente nuevamente electo tendría que ejercer sus funciones "hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección".

Este precepto tenía por objeto que en tal circunstancia se iniciara un nuevo período completo de cuatro años, a contar del día 1º de diciembre, volviéndose así a la regla general de los períodos

presidenciales de cuatro años, con el 1º de diciembre como "diez a quo". La aplicación de esta medida tendiente a regularizar el término presidencial, indudablemente, pudo tener como consecuencia que el presidente nuevamente electo ejerciera su cargo durante más de cuatro años, o menos de un cuatrienio, según el período se iniciase antes o después del día 1º de diciembre y, solamente en el supuesto de que el principio del nuevo período fuese exactamente un día 1º de diciembre, se daría la coincidencia de que el presidente nuevamente electo ejerciera el mandato supremo durante cuatro años, ya que sólo entonces concluiría el cargo el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección, como sucedía en la regla general del artículo 78.

En virtud de la reforma constitucional de 3 de octubre de 1882, realizada en el texto del artículo 80 de la Constitución política y que rigió hasta 1904, se dispuso: "En la falta absoluta del presidente, al nuevamente electo se le computará su período hasta el 1º de diciembre del año anterior al de su elección, siempre que no haya tomado posesión de su encargo en la fecha que determina el artículo 78".

Ahora bien, aun cuando este último precepto constitucional había sido objeto de una reforma realizada en 5 de mayo de 1878, la fecha señalada en esa reforma fue la misma de su redacción primitiva, o sea el día 1º de diciembre.

La reforma de 3 de octubre de 1882, tuvo como objeto cambiar el contenido del precepto anterior del artículo 80, pero no su interpretación y tal cambio sustancial consistió en disponer de un modo preciso que, en el caso de falta absoluta del presidente, el período de cuatro años respecto al nuevamente electo, se computaría desde el día 1º de diciembre del año anterior, a no ser que hubiere tomado posesión de su encargo precisamente el día 1º de diciembre inicial de un período regular. Esta última frase se adopta en nuestra interpretación, porque la repetida reforma del año 82 pretendió rigurosamente la regularidad cronológica de los períodos presidenciales.

Examinando los complicados antecedentes parlamentarios relativos a las reformas constitucionales realizadas en materia de la no-reelección presidencial y a la substitución del primer magistrado, iniciadas poco tiempo después del triunfo del Plan de Tuxtepec, antecedentes que van desde 1877 hasta 1882, se confirma que la reforma concluida en este último año respecto al artículo 80, quiso evitar que el período presidencial se alterase contra lo prescrito en la Constitución; pero la alteración prohibida sólo se refirió en cuanto al aumento, ya que estableció que en todo caso en que se iniciara un nuevo período por designación de un presidente para sustituir faltas absolutas, se computarían dentro del cuatrienio los meses transcurridos desde el día 1º de diciembre anterior.

Esta reforma, que no tiene más antecedente explicativo que el dictamen del Senado, de fecha 10 de octubre de 1877 (*Diario de los Debates de la Cámara de Senadores*, 8º Congreso, tomo I, p. 57 y ss.), supone o parte de la base que se quiso precisamente establecer la regla de que en ningún caso anormal, el período del presidente pudiese ser mayor, aunque sí menor, al regular de los cuatro años.

En concepto del que suscribe, en el único caso históricamente realizado durante la vigencia del artículo 80 original, o sea en el período presidencial iniciado por don Benito Juárez en 15 de junio de 1861, no hubo ninguna duda jurídica real o seria sobre que el presidente debió ejercer su cargo hasta el día 1º de diciembre de 1865. El problema o, mejor dicho, la cuestión fue planteada en 30 de noviembre de 1864 por el Gral. don Jesús González Ortega, para obtener la declaración indirecta de que el presidente Juárez le dejaría el poder, no al día siguiente sino el 1º de diciembre de 1865.

Esto se comprueba con la actitud del vice presidente, quien aceptó esperar hasta esta última fecha; así como con la celeridad con que contestó don Sebastián Lerdo de Tejada la

obvia cuestión constitucional de González Ortega, sólo complicada por otros problemas políticos de mayor dificultad.

México, D. F., a 3 de junio de 1966.

Antonio Martínez Báez